



Bajo el Volcán

ISSN: 8170-5642

bajoelvolcan.buap@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
México

Maydana, Silverio; Viaña Uzieda, Jorge
El nuevo escenario político y las perspectivas de la lucha autodeterminativa comunal indígena en
Bolivia
Bajo el Volcán, vol. 7, núm. 11, 2007, pp. 153-173
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28671112>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO Y LAS PERSPECTIVAS DE LA LUCHA AUTODETERMINATIVA COMUNAL INDÍGENA EN BOLIVIA

Silverio Maydana
Jorge Viaña Uzieda

RESUMEN

El presente artículo plantea elementos para un balance esencial de los seis años de luchas en Bolivia antes de la ocupación del andamiaje estatal por parte del MAS en el año 2006. El eje fundamental de la lucha son los movimientos indígenas y al interior de éstos cobra mayor importancia la evaluación de la experiencia más rica, más antiestatal, comunitaria y radical de sustitución de las estructuras estatales por formas comunitarias que se ha dado en el *Jacha Omasuyos* entre los años 2000 y 2003.

SUMMARY

The present article proposes elements for an assessment of the six years of struggle in Bolivia before the occupation of the state structure by the MAS in 2006. The indigenous movements are the fundamental axis of the struggles and within these it is particularly important to evaluate the experience of the *Jacha Omasuyos* between 2000 and 2003.

El marxismo exige de nosotros el análisis más exacto objetivamente comprobable, de la correlación de las clases y de las peculiaridades concretas de cada momento histórico.

Lenin, 1917

INTRODUCCIÓN

Los deseos de visibilizar las condiciones de una gran transformación revolucionaria de la sociedad boliviana sobre un fundamento material existente recorren los deseos más profundos de personas que generalmente

reciben el rótulo de “activistas” e “intelectuales”. Vivimos atravesados por una época de profundas transformaciones en la correlación de fuerzas entre las elites dominantes y su estado, por un lado, y las clases subalternas, por el otro, en estos seis años casi ininterrumpidos de luchas sociales.

Al interior de esta nueva época hemos vivido –también– transformaciones muy importantes en la correlación de las fuerzas en pugna. Altibajos de las luchas que demandan dar cuenta de la situación en la que nos encontramos hoy.

La praxis transformadora sólo es fértil si podemos orientarnos en medio de cambios tan vertiginosos. Únicamente si logramos dar cuenta de las especificidades del momento en el que nos toca desplegar las acciones de cambio transformador podremos actuar de forma eficiente, maximizar el tipo de trabajo y el tipo específico de esfuerzos que hacen falta desplegar para avanzar un peldaño más en la construcción de las condiciones materiales –objetivas y subjetivas– de un porvenir viable y satisfactorio para las grandes mayorías del país.

Sólo los doctrinarios y dogmáticos sustituyen la realidad existente por sus deseos o la adoración escatológica de las abstracciones del gurú de su preferencia bajo la forma de lo que Lenin denominaba “la frase revolucionaria”¹ que se convierte en receta infalible en todo tiempo y lugar para emborracharse con el sonido de las palabras que sólo son declamatorias altisonantes y muy peligrosas por carecer de bases reales para su despliegue efectivo. Estas posiciones irresponsables y febriles que no cuentan con un mínimo de “principio de realidad” son mal llamadas “radicales”.

Por eso la labor crítica radical consiste en descubrir las bases objetivas y subjetivas de las grandes transformaciones que potencialmente ya anidan y laten vivamente en la realidad palpable.² Con este artículo deseamos aportar elementos de esta construcción crítica como fuerza productiva de la transformación radical.

Planteamos hipótesis que no pretenden ser más que aportes a la discusión colectiva que impulsen los deseos y pasiones de realizar una praxis más eficiente y lúcida en la perspectiva de un cambio profundo en

lo que hoy llamamos Bolivia. Partiremos desarrollando la hipótesis de que existen tres periodos en estos seis años de luchas y fundamentaremos nuestra posición en el análisis de los hitos más importantes del devenir de las luchas desde la guerra del agua en abril de 2000 hasta nuestros días. Este análisis pretende ser un insumo para elaborar un *balance esencial* de los seis años de luchas en el país.

De manera complementaria y gracias a un sondeo realizado en la zona del altiplano norte de La Paz³ describiremos la situación actual de la experiencia más radical de sustitución de las estructuras estatales por formas comunitarias que se han dado en el país.

En las luchas de los denominados “movimientos sociales”, hoy en Bolivia es indudable que lo dominante es el eje de politización de la identidad étnica campesino comunitaria⁴ y dentro de esta perspectiva, la experiencia más radical es la del altiplano aymara. Si esto es así las tareas más importantes son dos: tener un balance esencial de los seis años de luchas, conscientes de que el eje fundamental son los movimientos indígenas y, dentro de éstos, la evaluación de la experiencia más rica y radical. Esperamos aportar nuevas miradas críticas así como enriquecer la información existente sobre estos dos temas esenciales.

TRES ETAPAS EN SEIS AÑOS DE LUCHAS

El conjunto de medidas neoliberales que fueron implementadas sin la posibilidad de una victoria popular en quince años acabó en abril de 2000. La guerra del agua fue el punto de partida de una nueva época de las luchas populares. Es incuestionable que fue la primera gran victoria frente al neoliberalismo que abrió una nueva época.

Esta movilización fue muy particular: capaz de articular una estructura organizativa novedosa, plural y heterogénea pero muy efectiva, logró desarrollar acciones de lucha muy particulares bosquejando los elementos para un nuevo paradigma de la acción colectiva ya que no fue una lucha “peticionista” al Estado, realizó un referéndum en Cochabamba para decidir autónomamente como sociedad civil si se expulsaba a la transnacional que se había beneficiado de la privatización del agua en el cual votaron

cincuenta mil personas. Este es sólo un ejemplo de una serie de luchas basadas en la capacidad de realizar acciones de legitimación social con el efecto de una verdadera revolución simbólica en la gran mayoría de la población que fue creando una fuerza de movilización imparable.

Fueron unificadas de forma efectiva las demandas y luchas del campo y de la ciudad y se fundó como hecho de masas, como hecho de la lucha desde abajo, el horizonte político en el que hoy, seis años después, nos estamos moviendo. El lunes 11 de abril de 2000 la guerra del agua concluyó con una victoria popular aplastante y un cabildo abierto con más de cien mil personas que proclamó la necesidad de realizar una asamblea constituyente para refundar el país sin intermediación partidaria.

Luego del “huracán” de la guerra del agua, en septiembre de 2000, tan sólo unos meses después, hubo un verdadero levantamiento indígena en la zona aymara, básicamente articulado alrededor de demandas relacionadas con temas vinculados con el desarrollo en las zonas rurales: contra la nueva ley de tierras y rechazo a las medidas neoliberales privatizadoras. Pero sobre todo significaba el resurgimiento de la demanda milenaria de acabar con el racismo y el colonialismo que además de estar institucionalizados en el Estado en la Bolivia de principios del siglo XXI se convierten en el elemento articulador básico de las relaciones sociales. Más de quinientos mil aymaras se movilizaron en un hecho político sin precedentes, no visto desde los levantamientos de Zarate Willca en 1899, mostrando cómo alrededor de la politización profunda de la identidad étnica se articulaban luchas antineoliberales y de descolonización del país.

Estos dos momentos se convirtieron en fundantes de una nueva época y en el punto de partida de seis años de luchas casi ininterumpidas que provocaron primero una crisis política de grandes dimensiones y luego una crisis general del Estado que se manifestó abiertamente a inicios de 2003. Abril y septiembre de 2000 también fueron los momentos más intensos de la tendencia de las zonas aymaras movilizadas por la supresión de las estructuras del poder estatal. Fue una verdadera respuesta comunal a las políticas neoliberales y a más de quinientos años de colonialismo y neocolonialismo.

A su vez, en abril de 2000 se registraron movilizaciones muy vigorosas en las zonas aymaras, aunque no fueron tan visibles debido a la enorme importancia de los sucesos que ocurrían en Cochabamba. Esta fue la segunda gran movilización que confirmaba definitivamente que ya nos encontrábamos en una nueva época de rearticulación de las luchas y de victorias frente al Estado y las políticas neoliberales. En abril y septiembre también jugaron un papel trascendental las movilizaciones cocaleras en la zona del Chapare.

La continuidad y centralidad de lo indígena se vieron confirmadas en este proceso en la persistencia de la lucha descolonizadora y antineoliberal del Movimiento Aymara; el tercer hecho de lucha más importante fue, otra vez, un nuevo levantamiento indígena comunitario aymara en junio de 2001, donde se pasó de las acciones de resistencia a un cuestionamiento abierto al Estado. Se creó el cuartel general indígena en Calachaca en la entrada de Achacachi, capital y primera sección de la provincia Omasuyos, luego se establecieron más cuarteles generales aymaras en toda la zona.

Después de 27 días de un bloqueo muy radical pero aislado y circunscrito a la zona rural aymara, donde se podía ver a los aymaras en estado de guerra abierto, se logró un hecho político significativo que impulsó las luchas a una nueva situación. Los líderes de los tres movimientos más importantes de ese momento (Cocaleros, Coordinadora del Agua y Movimiento Aymara) sellaron un pacto de unidad que lamentablemente no duró mucho tiempo, aunque consiguió sostener la lucha aymara e impulsar las luchas.

El movimiento cocalero que había jugado un papel importante en la resistencia al modelo y a las imposiciones extranjeras durante los años noventa –especialmente en la segunda mitad de la década, cuando se incrementó la presión norteamericana por la erradicación forzosa de la hoja de coca– protagonizó el cuarto hecho de lucha más significativo de este periodo al impedir, con un enorme costo de vidas humanas, el cierre del mercado de coca de Sacaba, en enero de 2002. Es por demás evidente que los triunfos parciales o totales del movimiento siguen intactos y se confirma que seguimos en una época de ascenso de los movimientos sociales.

Para mediados del año 2002 y debido a las elecciones nacionales los movimientos sociales fueron incapaces de sostener la alianza que había permitido impedir la represión estatal en la zona aymara y, además, crear una gran expectativa de que nos encamináramos a preservar y seguir proliferando núcleos organizativos plurales y diversos pero orientados a construir un proyecto político de país único y viable basado en las alianzas estratégicas que ya se habían realizado con éxito en julio de 2001. Múltiples elementos conspiraron contra esta perspectiva que no se materializó. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) por separado lograron teñir el Parlamento de lo indígena y popular de una forma nunca antes vista en la historia de Bolivia.

El año 2003 será el más importante en esta etapa, sobre todo porque es el año en que llega a un punto culminante el proceso de ascenso sostenido de las victorias sociales con tres grandes luchas de los subalternos.

En enero de 2003 tuvo lugar la marcha histórica de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia. Fue violentamente reprimida por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el país quedó electrizado por la vocación violenta y profundamente autoritaria de un régimen débil que no logró darse cuenta que ya no eran los tiempos de los años 1993-97; primer gobierno de “Goni” que se movía impunemente aplicando las recetas neoliberales sin posibilidades de una resistencia popular efectiva. Este fue el prelude de un levantamiento popular urbano tan solo un mes después; en febrero, el nuevo gobierno aprobó un impuesto directo a los ingresos de personas que ganaban dos sueldos mínimos (840 Bs. –sueldos miserables–) que derivó en un motín policial y en el enfrentamiento armado entre las dos instituciones represivas del Estado. No obstante, lo más significativo es que se produjo un levantamiento popular urbano, especialmente localizado en La Paz, donde la gente movilizada aplicó la misma lógica que habían utilizado los levantamientos indígenas; identificaron los símbolos del poder político y fueron a quemarlos: el Palacio de gobierno, la vicepresidencia, los ministerios, las sedes de los partidos políticos. Tal vez lo más significativo de febrero –que después se profundizó en octubre– fue la ausencia visible de líderes de la protesta. Son formas de protesta social ancladas en un profundo proceso de

autoorganización. Con un saldo terrible de una treintena de muertos, la mayoría civiles y policías y algunos militares, se registró la manifestación más dolorosa; la sociedad boliviana había llegado a un punto de no retorno en la crisis estatal que hoy continúa.

Este fue el momento de manifestación claro de que la crisis política se había convertido en una verdadera crisis del conjunto de los mecanismos de dominación. Es decir, una crisis general del Estado. La ceguera del poder fue tan grande que el gobierno durante ese año, especialmente entre agosto y septiembre, mostró tendencias a seguir el proceso de profundizar políticas de amplio beneficio para las transnacionales, con la intención de exportar gas por Chile en favor exclusivo de las petroleras. En septiembre empezó una movilización en la zona aymara, la cual fue reprimida por parte del gobierno; luego se expandió a la Ciudad del Alto y el gobierno respondió asesinando a 67 personas. Dicha movilización se convirtió en la insurrección que el 17 de octubre del 2003 logró expulsar al presidente. Así se abrió un nuevo escenario político. Esta insurrección pacífica⁵ fue, sin duda, el punto culminante del proceso de asenso de los movimientos sociales que vivimos desde abril del año 2000. Pero, por eso mismo, sin que en ese momento nos diéramos cuenta, fue el punto de partida de la retoma de la iniciativa estatal. No en vano la gente se conformó con la sucesión constitucional en la Presidencia de la República.

EL ESTADO RETOMA LA INICIATIVA POLÍTICA

Este nuevo periodo se manifestó en todo el proceso que va de fines del año 2003 a mediados de 2004. El referéndum sobre el gas realizado en julio de 2004 fue el punto que marcó la retoma de la iniciativa política estatal a escala nacional. La gente lo llamó el *tramparendum* porque fue una trampa muy bien orquestada que no resolvería nada de lo fundamental ni recuperaría los hidrocarburos. Por tal motivo debía ser denunciado, sin embargo, cabecillas de algunos movimientos cometieron errores tácticos, los cuales determinaron que ciertos dirigentes que se habían vuelto muy visibles en El Alto después de llamar al boicot abierto acabaran yendo a votar en el supuesto *tramparendum*, creando una época de

desconcierto, desmoralización y desorganización de las luchas, en el proceso de organización y realización del *tramparendum* pero sobre todo luego que el Estado retomó la iniciativa después de cuatro años de iniciativa política sostenida, ascendente y a escala nacional de los movimientos sociales dando inicio a una nueva etapa que no duraría demasiado.

En este nuevo periodo de iniciativa política del Estado, el gobierno como regalo de fin del año 2004 incrementó el precio del diesel con la consiguiente subida de los precios de la canasta familiar. Si los movimientos sociales habían sido incapaces de desarrollar una táctica de protección del avance de cuatro años de luchas entre fines de 2003 y mediados de 2004 para seguir proyectando su ascenso y mantener la iniciativa política, en ese momento cometían un error más grave aún y mostraban incapacidad de retomar la iniciativa política para defender la economía popular. El costo fue el paso rápido a una situación todavía más adversa para dichos movimientos.

LA INICIATIVA POLÍTICA PASA DEL ESTADO A LA DERECHA CORPORATIVA

En este nuevo escenario y frente al desafío popular es la derecha corporativa (petroleras, terratenientes, etc.), agrupada en el Comité Cívico de Santa Cruz, la que abandera de forma demagógica la lucha contra el *dieselazo* ante la incapacidad de hacerlo de la izquierda y los movimientos sociales. Decimos “demagógica” porque de manera muy inteligente –por primera vez en la historia de la oligarquía cruceña– adquieren fuerza de movilización popular y masiva. Luego, casi de inmediato, se olvidan del *dieselazo* y encaminan el proceso hacia un cabildo autonómico que claramente se presentó como la respuesta política al avance interrumpido de casi media década de los movimientos sociales.

En enero de 2005, después del *interregno* de iniciativa estatal que duró todo el año 2004 sin que los movimientos sociales pudieran retomar la iniciativa política, la posta la tomó la derecha corporativa al lograr un objetivo político trascendental: poner a los movimientos sociales en una situación de relativa adversidad, a pesar de que la crisis de Estado continuaba. Los síntomas de esta nueva época se sintieron inmediatamente;

la Guerra del Agua –esta vez en El Alto, para expulsar a la Suez, la empresa transnacional de agua más grande del mundo (que en Bolivia se llama Aguas del Illimani)– también desarrollada en el primer mes del año, mostraba un escenario diferente.

Al finalizar la movilización se dijo que habíamos logrado el objetivo de expulsar a la empresa. Se realizó una “marcha por la victoria”: decenas de miles de personas festejaron la expulsión de la Suez y, meses después, se convocó a una movilización para expulsar de nueva cuenta a la mencionada empresa. Es decir, no se había logrado el tan ansiado objetivo. Pero lo peor de todo es que no se comprende ni se evalúa debidamente el porqué ocurrieron estos hechos.

Invade una sensación de derrota y de desmoralización, pero sobre todo no se entiende que ya quedaron atrás los tiempos de iniciativa política y victorias contundentes como las de los años 2000-2003. Esta es una lección difícil de aprender. Y no sabemos si a fines del año 2005 y con toda la confusión electoral fue posible lograr alguna comprensión. El contexto general ha cambiado. La iniciativa política a escala nacional aunque sin proyecto nacional sino sólo regional, la tiene –desde principios del año 2005– la derecha corporativa.

No olvidemos que después de los 67 muertos del mes de octubre recién pudo realizarse una gran movilización nacional casi dos años después, lo cual muestra la dificultad de los movimientos para lograr articular grandes protestas en este nuevo periodo.

En ese contexto se dio la última gran movilización por la nacionalización del gas en mayo del año 2005, detonada por la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos. La lucha de mayo-junio fue una pequeña victoria de los movimientos sociales en condiciones de adversidad. Se logró que la consigna de nacionalización del gas se expandiera a escala nacional y se impidió que los partidos conservadores (MIR, MNR) luego de ser expulsados del poder volvieran a ejercerlo. En términos de movilización y proyecto económico fue más grande e importante que la insurrección de octubre. Pero, sobre todo en El Alto, quedó una sensación de derrota.

Este estado de ánimo es fundamental porque evidencia lo que nosotros consideramos un nuevo periodo dentro de estos seis años de luchas.

BAJO EL VOLCÁN

El movimiento social pagó caro los errores cometidos. Pero, además, los sectores conservadores fueron capaces de sostener un gobierno (C. Meza) que retomó la iniciativa política para pasársela a las propias manos de los dueños del país (la derecha corporativa).

Debido a estos factores, la correlación de fuerzas y la dinámica institucional llevaron al país a la coyuntura electoral como mejor mecanismo de culminar el proceso de destrucción y fragmentación de los movimientos sociales, logrando lo que hasta hoy no han podido hacer los sectores conservadores: recomponer la institucionalidad estatal. Aunque, como se observa, han podido avanzar bastante, más de lo que la propia izquierda y los movimientos sociales logran ver y entender.

Cuadro sintético de los hitos centrales en las tres etapas

Primera etapa:

De iniciativa política nacional de los movimientos sociales

Abril de 2000	Guerra del Agua
Septiembre de 2000	Levantamiento aymara
Junio de 2001	Levantamiento aymara
Enero de 2002	Guerra de la coca en Sacaba
Junio de 2002	Marcha de la CPESC
Enero de 2003	Marcha por la sobrevivencia
Febrero de 2003	Impuestazo
Octubre de 2003	Insurrección en El Alto

Segunda etapa:

De iniciativa política nacional del Estado

Julio de 2004	Referéndum sobre el gas
---------------	-------------------------

Tercera etapa:

De iniciativa política nacional de las estructuras corporativas conservadoras (Comité Cívico Cruceño, Transnacionales petroleras)

Diciembre de 2004	<i>Dieselazo</i> de Meza
Enero de 2005	Cabildo Autónomico
Enero de 2005	Guerra del agua en El Alto
Junio de 2005	Movilización nacional por el gas

El esbozo de un balance de seis años de luchas que pincelamos líneas arriba y que se sintetizan en el cuadro se confirma con las tendencias a la recomposición de las estructuras estatales –al menos formal– en la zona aymara, lo cual explicaremos luego de una introducción histórica y antropológica mínima necesaria.

EL JACHA OMASUYOS

El centro de la lucha por la autodeterminación comunal indígena es “El territorio del Agua” o Jacha Omasuyos (Gran Omasuyos), una zona ecológica demográfica con particularidades específicas. Es una planicie con un microclima especial con abundante agua que llega del deshielo de la Cordillera Real, incluso en algunas zonas se produce un tipo de maíz enano (entre otras: la península de Copacabana). Cuenta con una de las densidades demográficas más altas del altiplano. Abarca desde la “rinconada” de la Cordillera Real hasta las riveras del lago Titicaca. Hoy desmembrada por la territorialidad colonial republicana en cuatro provincias (Omasuyos, Los Andes, Camacho, Manco Cápac).⁶

Esta territorialidad es resultado de las formas de organización macroespaciales de la sociedad aymara precolonial y preincaica que subsiste hasta hoy. Básicamente tiene relación con el control de la estructura transversal del bloque montañoso. Un control directo de la economía, sin intermediarios ni mercados, los recursos de ambos lados de la Cordillera

Real podían ser controlados por la red familiar extendida, lo que algunos antropólogos han llamado “control vertical de un máximo de pisos ecológicos”. Desde hace siglos ha sufrido un deterioro significativo.

Además, esa organización del espacio adquirió un valor simbólico muy importante. Las tierras bajas del poniente son asociadas en la cultura aymara, con los antepasados y la muerte y se conciben como “arriba” o “afuera” y las tierras fronterizas del otro lado, es decir, del otro lado de la Cordillera Real, asociada con los “salvajes” del trópico que no tenían agricultura y no eran sedentarios. Este era el territorio de “abajo” o el “interior”.

En este orden macro-espacial, que da un sentido profundo al territorio, se denominó Urcusuyu al territorio que quedaba en medio, y a su contraparte: Umasuyu, en medio de lo que denominaron “arriba” y “abajo” o “afuera” y tierras del “interior”.

Urcusuyu corresponde a la zona oeste de la planicie y Umasuyu es toda la altiplanicie este, al norte del Río Desaguadero. El significado de ambos es muy importante, Urcusuyu en aymara “urcu” es “duro, sólido, áspero, masculino” y su contraparte denominada Umasuyu, “uma” en aymara significa “tierno, líquido, suave, femenino”. En síntesis, entre la costa y la selva estaban el Urcusuyu y el Umasuyu fusionados en una complementariedad simbióticamente articulada.⁷

Esta macro división del espacio es fundamental para entender la capacidad que despliega la lucha comunal autodeterminativa al reapropiarse colectivamente del espacio que desde hace cientos de años forma parte de una sola gran unidad territorial y que la Colonia, pero especialmente la República han intentado fragmentar y disolver. Incluso la participación popular neoliberal de mediados de los años noventa ha profundizado esta fragmentación del cuerpo indígena con un reconocimiento distorsionado e interesado de la territorialidad indígena. Son reconocidos como el Estado y las elites criollas castellano-hablantes quisieran que fueran y no como realmente son. Estas medidas significan una prolongación sutil y sofisticada de un colonialismo subyacente y profundo contra el que se han levantado las comunidades del Jacha Omasuyos.⁸

PERSPECTIVA ACTUAL DE LA LUCHA AUTODETERMINATIVA COMUNAL⁹

Los llamados movimientos sociales en Bolivia son fundamentalmente movimientos indígenas. Entre éstos, el más radical es el de la zona aymara, pues es el que más ha avanzado en crear formas de autogobierno en la perspectiva de la autodeterminación nacional. Sin embargo aún existe una idea vaga de lo que ha sucedido y sucede realmente en estas zonas. En la última parte del artículo hacemos una breve descripción de algunos procesos fundamentales que están ocurriendo y han ocurrido en la zona del Jacha Omasuyos.

A continuación describimos y analizamos ciertos procesos concretos en relación con las tomas de instituciones políticas estatales, la situación actual de éstas y ciertos procesos políticos fundamentales que se han vivido en la zona respecto a este tema, en especial la posibilidad o no de lograr formas de gestión territorial que permitan sustituir de manera sostenible las formas estatales de gestión. En el análisis nos limitamos sólo a las tres capitales de las tres provincias del Jacha Omasuyos que estuvieron en el centro de las movilizaciones: Achacachi, capital de la Provincia Omasuyos; Pucarani, capital de la provincia Los Andes y Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho.

LA EXPERIENCIA EN ACHACACHI

Achacachi, como primera sección de la provincia Omasuyos, fue el centro de las movilizaciones del año 2000, en especial en abril de ese año, momento en que se tomaron las instituciones del Estado.¹⁰ Las tomas de la subprefectura, la policía, los juzgados, por un tiempo y la destrucción de la cárcel fueron parte de una movilización masiva y comunitaria. Hasta hoy no existe cárcel ni tránsito,¹¹ pero lo más importante es que no se han realizado esfuerzos significativos de sustitución de las funciones estatales por formas comunitarias sino hasta el año 2003, lo cual explicaremos más adelante.

A principios del año 2002 regresó a funciones la subprefectura,¹² aunque para ser expulsada de nueva cuenta en la movilización de octu-

bre de 2003 y lograr volver definitivamente a mediados de 2004.¹³ Sin embargo, el subprefecto que era nombrado por el prefecto ahora es elegido en un ampliado provincial de la Federación Campesina,¹⁴ de igual forma la designación de los corregidores (antes era atribución de los subprefectos) se realiza por medio de ternas que plantean los 23 cantones de la Provincia.¹⁵ De hecho, desde la gestión de Nicolás Quenta, en la mayoría de las provincias de La Paz los subprefectos son elegidos por las bases campesinas¹⁶ y proclamados por el prefecto, aunque los partidos tradicionales (MIR, MNR) intentan siempre manipular el proceso.¹⁷ Una cuestión importante que hay que recalcar es que la subprefectura de Achacachi antes del año 2000 contaba con 14 funcionarios.¹⁸ Hoy sólo tiene un funcionario (el secretario general) más el subprefecto. Son estructuras estatales que han sido apropiadas por las lógicas comunitarias y en este estatus intermedio en el que se encuentran se podría decir que son meramente formales y decorativas. De hecho, carecen de presupuestos propios para algún tipo de actividad.¹⁹

Pero también la policía con funciones muy restringidas –sin contar con una cárcel ni con retén ni posta de tránsito, por ejemplo– retornó a mediados del año 2004.²⁰ En un balance autocrítico el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas,²¹ nos dijo que hubo un descuido en seguir con la discusión del autogobierno aymara después de octubre de 2003.

La experiencia más interesante que vivió Achacachi fue la capacidad de articular una alianza con el pueblo. Las comunidades junto con los vecinos emprendieron la producción de formas sociales de satisfacer las funciones de seguridad ciudadana a través de mecanismos vecinales y comunales combinados. En un ampliado cantonal (asamblea de vecinos del pueblo con comunarios) se discutió la formación de los grupos de seguridad ciudadana.²² En Achacachi hay nueve zonas en todo el pueblo, cada grupo de dirigentes de las respectivas zonas se hacía cargo de la seguridad ciudadana y esto funcionó desde el año 2000 hasta aproximadamente mediados de 2004.²³ En medio de este proceso en el año 2003, por un periodo breve, se formó un grupo de 66 jóvenes voluntarios,²⁴ todos ellos de las comunidades indígenas para reforzar el control ciudadano apoyados por la Alcaldía de Achacachi. Esta experiencia duró aproxi-

madamente cinco meses y se fue disolviendo. Dichas prácticas de gestión territorial son fundamentales para replantearse hoy la lucha autogestionaria ya que lo central de la lucha actual es “inventar”, en el buen sentido de la palabra, formas de gestión territorial que sean comunitarias pero viables a largo plazo.

Lamentablemente, a mediados del año 2004, ya no existían estos extraordinarios esfuerzos de reapropiación social de la gestión del territorio y de las funciones de seguridad ciudadana en el pueblo.

LA RADICALIDAD COMUNITARIA EN PUCARANI

Pucarani, que hasta el año 1917 fue capital de la segunda sección de la provincia Omasuyos,²⁵ vivió un proceso muy parecido a Achacachi.

Las tomas de las instituciones estatales se dieron en septiembre de 2000.²⁶ Recién en junio de 2002 regresó la subprefectura. Pero, como en Achacachi y las provincias paceñas, el subprefecto es elegido por las bases,²⁷ aunque el prefecto es el que lo legaliza según la lógica y fines estatales. A diferencia de Achacachi parecería que siempre fue relativamente formal la subprefectura ya que de manera invariable contó sólo con un funcionario más el subprefecto.²⁸

La experiencia de disolución de los mecanismos de coerción pública estatal duró más o menos el mismo tiempo que en Achacachi: desde septiembre de 2000 hasta principios del año 2004, ya que no existía policía en Pucarani.²⁹ Algo que es importante destacar es que Pucarani vivió antes la experiencia profunda y comunitaria de la creación de formas más comunales indígenas de sustitución de las funciones policiales, que las simplemente asentadas en mecanismos vecinales y barriales. En el año 2002 se creó en Pucarani la policía indígena apoyada también por la Alcaldía.³⁰ Incluso, en la denominación y representación social estaba claro que tenía un contenido más étnico indígena; en Achacachi muchos se refieren a la formación de grupos de jóvenes de las comunidades como grupos de control ciudadano, en Pucarani la mayoría se refiere a este proceso como “policía indígena”.

Las centrales y subcentrales agrarias, entre otras de Patamanta, impulsaron la formación de un grupo de jóvenes líderes de las comunidades para estructurar la policía indígena en el año 2002, una experiencia que duró aproximadamente seis meses. Fue y es tan fuerte esta experiencia que uno de los impulsores de la formación de la “policía indígena” es actualmente corregidor de Pucarani.³¹

Según nos decía el alcalde de Pucarani, Alejandro Mamani, la experiencia fue fundamental, pues si vuelven a tomar las subprefecturas y la policía, ahora ya no se haría con las manos vacías, sino con un reglamento, un plan para incorporar la verdadera esencia de la justicia comunitaria.

PUERTO ACOSTA COMO RETAGUARDIA

Puerto Acosta, capital de la provincia Camacho, fundada a principios del siglo XX (1908) como parte del proceso de descuartizamiento republicano de las lógicas macro-territoriales indígenas, vivió un proceso muy particular en estos últimos seis años de movilización y relativamente diferente a las experiencias de Achacachi y Pucarani.

Si bien se registró una intervención de la policía y la subprefectura en octubre de 2003,³² no tuvo la intensidad ni la radicalidad con que se dio en Achacachi y Pucarani. No fueron estrictamente tomas acompañadas con quemas de libros notariales, etc., sino sólo intervenciones momentáneas de estas instituciones. Aunque en varios momentos de las movilizaciones, en especial en el año 2003, los comunarios insistían en hacer desaparecer la posta policial.³³

Como en Pucarani, Achacachi y las provincias pacañas el subprefecto es designado en amplios provinciales;³⁴ como existen tres secciones de provincia, se van turnando para ocupar el cargo de subprefecto bajo la misma lógica comunitaria de rotación obligatoria de cargos para la designación de los secretarios generales de los sindicatos campesinos.

Lo que parece claro en todo el Jacha Omasuyos es que a nivel de las subprefecturas se ha impuesto una cierta autonomía indígena *de facto* tutelada y legitimada estatalmente por el prefecto.

En la actualidad el alcalde es Joaquín Chávez del MIP. En las tres capitales de las provincias las elecciones han sido ganadas por el MAS o el MIP. También es evidente cómo en el Jacha Omasuyos, en el terreno electoral, han ganado presencia e importancia, las expresiones políticas de auto-representación indígena.

Si observamos el proceso vivido en las tres provincias de forma comparativa, definitivamente es posible decir que el momento central de la recomposición de las estructuras estatales con todas las particularidades que hemos mostrado, pero sobre todo el retorno del control policial, se da en los primeros seis meses del año 2004. Año fundamental en el proceso de retoma de la iniciativa política por parte del Estado.

Cuadro de las fechas de tomas y retorno de las instituciones estatales en las tres capitales de Provincia (Omasuyos, Los Andes, Camacho)

	Fecha de las tomas o intervenciones	Fecha del retorno de la subprefectura	Nuevas tomas de la subprefectura	Fecha de nuevo retorno subprefectura	Fecha de retorno de la policía
Achacachi	Abril de 2000	Principios de 2002	Octubre de 2003	Mediados de 2004	Mediados de 2004
Pucarani	Septiembre de 2000	Mediados de 2002			Principios de 2004
Puerto Acosta	Octubre de 2003	Principios de 2004			Principios de 2004

Con datos de las entrevistas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9.

El año 2004 fue definitivo para el ocaso de las experiencias de gestión territorial de reapropiación social de las funciones de seguridad. En Achacachi vuelve la policía a mediados de ese año, en Pucarani regresa a principios del mismo, y en Puerto Acosta los intentos más radicales por sustituir a la policía por formas comunales se verifican en los años 2003 y 2004, y todo fue rápidamente normalizado.

Según observamos en el cuadro, también las experiencias de producir, dentro de la sociedad comunal, formas complementarias a las vecinales y barriales pero más profundas que las segundas, de gestión de las

BAJO EL VOLCÁN

funciones policiales, se vivieron, de manera pasajera, entre 5 a 6 meses en los dos casos, durante 2001 a 2002 en Pucarani y en el año 2003 en Achacachi.

Funcionamiento de la policía indígena

Pucarani	Cerca de 6 meses entre los años 2001-2002
Achacachi	Cerca de 5 meses en el año 2003

Con datos de las entrevistas 3 y 9.

Tanto a escala nacional como en el ámbito del Movimiento Aymara, el año 2004 (época en que gobernaba Carlos Meza) fue fundamental en el avance de desmontar la iniciativa de los movimientos sociales, por un lado, y en reponer las estructuras estatales, al menos formalmente, en las zonas aymaras, por el otro. No olvidemos que el *tramparendum* fue realizado en julio de 2004. Para entonces las tres capitales de provincia que hemos estudiado ya contaban con subprefecturas y, sobre todo, con postas policiales; el Estado ya había avanzado significativamente en el proceso de retoma de la zona del Jacha Omasuyos.

Con el análisis y datos presentados lo último que queremos lograr es desmoralizar a los militantes, activistas e intelectuales. Todo lo contrario, más bien intentamos posicionarnos en las luchas sabiendo cuáles son las condiciones de posibilidad del momento histórico que estamos viviendo, al contar con “el análisis más exacto objetivamente comprobable, de la correlación de las clases y de las peculiaridades concretas de cada momento histórico”, como expresa la cita que precede este artículo.

Esto es vital para encarar con más claridad y con realismo la lucha que han iniciado los movimientos sociales en Bolivia hace ya seis años y, en especial, para aprender las lecciones de la lucha de autogobierno y autodeterminación del pueblo aymara, sabiendo qué terreno pisamos y cuáles son algunas de las debilidades más importantes.

ENTREVISTAS*

Achacachi

Entrevista número 1: *A Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi, 7 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 2: *A Carmelo Mamani, subprefecto de Achacachi, 7 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 3: *A Feliciano Yujra, periodista, corresponsal de radios Metropolitana y San Gabriel, 7 de noviembre de 2005.*

Puerto Acosta

Entrevista número 4: *A Rubén Apaza, secretario del Despacho del Alcalde de Puerto Acosta, 8 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 5: *A Alberto Fernández, juez de Instrucción de Puerto Acosta, 8 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 6: *A Gregoria Villca, concejal del MIP, municipio de Puerto Acosta, 8 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 7: *A Alfredo Yana, secretario general de la Sub Prefectura de Puerto Acosta, 9 de noviembre de 2005.*

Pucarani

Entrevista número 8: *A Lucy Aruquiya, secretaria de la parroquia de Pucarani, 10 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 9: *A Alejandro Mamani, alcalde de Pucarani, 10 de noviembre de 2005.*

Entrevista número 10: *A René Yujra, secretario general de la Subprefectura de Pucarani, 10 de noviembre de 2005.*

(*Estas entrevistas fueron realizadas por los autores del presente artículo.)

NOTAS

¹ “La frase revolucionaria es la repetición de las consignas revolucionarias sin tener en cuenta las circunstancias objetivas en el cambio dado de los acontecimientos... Consignas magníficas, atrayentes y embriagadoras, pero desprovistas de base”, V. I. Lenin, “Acerca de la Frase revolucionaria”, *Obras Completas*, Tomo 27.

² La labor crítica consiste en visibilizar sin inventar y potenciar sin falsas quimeras ni autoengaños *las condiciones de posibilidad del cambio revolucionario*. Las *condiciones de posibilidad* se relacionan con la doble preocupación de, por un lado, volver inteligible, expandir, generalizar y liberar las tendencias más radicales (en el sentido de llegar a la raíz de los problemas) ya existentes, verificables y con existencia fáctica. Pero a la vez, teniendo conciencia de sus límites: qué es lo que habilitan y posibilitan estas condiciones concretas, realmente existentes, y qué no, para no caer en la banalidad dogmática, constructora de derrotas.

³ Los autores agradecemos al CEP (Centro de Estudios y Proyectos) por haber colaborado con esta investigación, la cual sin su ayuda no hubiera sido posible.

⁴ Ver, entre otros, el libro más actual y sugerente: *Movimiento Indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Fabiola Escárgaza y Raquel Gutiérrez (coordinadoras), UNAM, México, 2005.

⁵ Los alteños acuñaron la frase “somos pecho de muralla” para manifestar la fuerza y la legitimidad de una resistencia heroica que no apeló a la violencia sino a la legitimidad de la protesta que luego fue apropiada por algunos de los dirigentes más visibles.

⁶ *Achacachi: Medio Siglo de Lucha Campesina*, Javier Albo, La Paz, CIPCA, 1979.

⁷ Tristan Platt, “El pensamiento político Aymara”, en *Raíces de América. El mundo Aymara*, Editorial Alianza, Madrid, 1988.

⁸ Para un análisis más detallado de los motivos económicos, políticos, culturales y simbólicos por los cuales estamos viviendo la insurgencia aymara ver: *Ya es otro tiempo el presente, cuatro momentos de insurgencia indígena*, Forrest Hylton, Felix Patzy y otros, Editorial Muela del Diablo, La Paz, 2003. *Tiempos de Rebelión*, Álvaro García, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Luis Tapia, Editorial Muela del Diablo-Comuna, La Paz, 2001. *El retorno de la Bolivia Plebeya*, Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Luis Tapia. Editorial Muela del Diablo-Comuna, La Paz, 2000.

⁹ Agradecemos al CEP por colaborar en la investigación sobre las formas de gestión comunal después de las tomas de las instituciones en la zona aymara.

¹⁰ Entrevistas números 1, 2, 3.

¹¹ Entrevista número 1.

¹² Ídem.

¹³ Entrevista número 2 y 3.

¹⁴ Entrevista número 2.

¹⁵ Ídem.

¹⁶ Entrevista número 7.

¹⁷ Entrevista número 1.

¹⁸ Entrevista número 2.

¹⁹ Entrevista número 7.

²⁰ Entrevista número 3.

²¹ El MIP ha ganado las elecciones municipales en Achacachi y cuenta con cinco de los nueve concejales, pudiendo hacer un gobierno municipal sin hacer alianzas de ningún tipo con otros partidos.

²² Entrevista número 3.

²³ Ídem.

²⁴ Ídem.

²⁵ En el año 1917 se creó la provincia Los Andes desmembrando aún más la macro-territorialidad indígena del Jacha Omasuyos. Fue la época cumbre de los liberales que después de derrotar el levantamiento indígena dirigido por Zárate Willca en 1900, gobernaron Bolivia ininterrumpidamente hasta 1920.

²⁶ Entrevista número 9.

²⁷ Ídem.

²⁸ Ídem.

²⁹ Ídem.

³⁰ En la Alcaldía, actualmente gobierna el MAS (Alejandro Mamani) en alianza con el Plan Progreso, cuenta con tres concejales de los siete, otros tres son del MIP y uno del Plan Progreso (partido del alcalde de El Alto, José Luis Paredes).

³¹ Entrevista número 9.

³² Entrevista número 7.

³³ Entrevista número 6.

³⁴ Entrevista número 7.